



**SENADO DE LA REPÚBLICA
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
LXV LEGISLATURA**

Las que suscriben Senadoras, **Olga Maria del Carmen Sánchez Cordero Davila**, integrante del Grupo Parlamentario Morena, **Xóchitl Gálvez Ruiz**, integrante del Grupo Parlamentario Partido Acción Nacional y **Alejandra Lagunes Soto Ruiz**, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la LXV Legislatura de la H. Cámara de Senadores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción II, y 276 numeral 1, fracción I, todos del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del Pleno la siguiente **PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD POR LA INTRODUCCIÓN DE SUS MEDICINAS ANCESTRALES**, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Nuestra Constitución Política en su artículo segundo determina que nuestro país es una nación sustentada primordialmente por sus poblaciones indígenas, las cuales tendrán el derecho a su autonomía y a su libre determinación en cuanto a sus costumbres, tradiciones, lenguas, sistemas normativos, de convivencia y de organización social, política y económica, así como para *“preservar y enriquecer sus conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad”*¹.

La **medicina tradicional** y el uso de las plantas sagradas son prácticas milenarias y latentes en las distintas etnias, tribus y comunidades indígenas del país y de la región, que forman parte de sus sistemas autóctonos de salud y que representan una parte indispensable de su cosmovisión y el arraigo a sus tierras ancestrales. No obstante, dichas prácticas no han sido respetadas ni aceptadas por el mundo occidental, pues se han equiparado a las plantas ancestrales con propiedades psicoactivas con narcóticos como la heroína y cocaína que

¹ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Artículo 2, inciso A, numeral IV.

“constituyen un problema especialmente grave para la salud pública”², por lo que erróneamente han sido perseguidas penalmente dentro del territorio mexicano.

Hoy en día, al menos cuatro personas pertenecientes a poblaciones indígenas se encuentran privadas de la libertad en centros penitenciarios mexicanos por la introducción de sus medicinas ancestrales al país. Actualmente enfrentan procesos penales los siguientes:

1. **José Mercedes Campos Campos:** integrante de la comunidad Shipibo-Konibo de Perú. El 9 de marzo de 2022, José Campos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (“AICM”) al ingresar con 4 kilos de ayahuasca en su equipaje personal. Desde entonces y a la fecha, permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, enfrentando cargos por introducción de estupefacientes al territorio nacional. El asunto se encuentra bajo la Causa Penal **74/2022** y actualmente se está desarrollando su juicio penal.
2. **Claudino Pérez Torres:** *Taita* o curandero de la etnia Murui-Huitoto del departamento Amazonas, Colombia. El 8 de marzo de 2022 fue detenido en el AICM con 3 kilos de ayahuasca. Desde entonces y a la fecha permanece bajo prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, enfrentando cargos por introducción de estupefacientes al territorio nacional. El asunto se encuentra bajo la Causa Penal **71/2022**.
3. **Lauro Hinostroza García:** Curandero del pueblo Quechua - Ashaninka, del Perú, detenido el 27 de septiembre de 2022 en el AICM por introducir 6 litros de ayahuasca. Actualmente se encuentra detenido en el Reclusorio Norte bajo la Causa Penal **353/2022**.
4. **Eric Rosas da Cruz:** es reconocido como líder dentro de la comunidad indígena Noke-Koi del Estado de Acre, Brasil. El asunto se encuentra bajo la Causa Penal **206/2022**.

En cuanto a los derechos humanos de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, existe una multiplicidad de normas, tanto nacionales como internacionales, que imponen estándares y garantías para su protección. En principio, el artículo 1° de la Constitución establece la obligación que tiene el Estado mexicano de reconocer y garantizar el ejercicio de

² Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07 de febrero de 1984. Artículo 245 fracción I. Revisar la inclusión de la psilocibina y hongos alucinógenos en el listado.

los derechos humanos de todas las personas, conforme al principio de igualdad y no discriminación.

Adicionalmente, a partir de la reforma de 2011³ en materia de derechos humanos, se integró a la Constitución el principio *pro persona* como aquella obligación que tienen todas las autoridades de escoger la protección más amplia al aplicar la norma, procurando así la menor restricción en el goce de los derechos humanos.

Por otro lado el artículo 2° Constitucional contempla el derecho que tienen las personas pertenecientes a las poblaciones originarias de autodeterminarse, teniendo como criterio fundamental el principio de autoidentificación para la definición de su pertenencia o no a la comunidad indígena y, consecuentemente, para su establecimiento como sujeto de derechos. Este principio es compartido por el artículo 2° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en el universo de instrumentos internacionales en la materia⁴, las cuales prevén una amplia gama de derechos, tanto sustantivos como de carácter procedimental, que le corresponden a quienes integran las poblaciones indígenas.

Más aún, en ese mismo articulado, se prevé el derecho que tienen estas personas de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, lo cual significa que durante el desarrollo de todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas, en donde se reconocen los retos por los que se enfrentan las personas pertenecientes a pueblos indígenas que han sido víctimas de procesos en los que no se consideran sus lenguas, sus especificidades culturales, ni su condición de marginación y exclusión social, lo que, en la mayor parte de las ocasiones, ha redundado en condenas injustas o excesivas, así como en el quebranto de las instituciones propias de los pueblos⁵. Por ello, dicho Protocolo pone a disposición de las autoridades judiciales las herramientas de interpretación jurídica que garanticen de mejor manera los derechos de estas poblaciones.

A su vez, como una extensión de los artículos 24, 25 y 26 del Convenio 169 de la OIT, se reconoce el derecho que tienen las personas pertenecientes a comunidades indígenas para

³ Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contradicción de Tesis 293/2011. Resolución del 3 de septiembre de 2013.

⁴ Por ejemplo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuyo decreto es del 13 de noviembre de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 4 de junio de 2016.

⁵ Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas. Suprema Corte de Justicia de la Nación (2014). Página 8.



viajar libremente con sus medicinas ancestrales que responden a sus sistemas comunitarios de salud.

De esta forma, es dable concluir que las personas indígenas se encuentran sujetas a un régimen de protección especial que debe ser respetado por parte de las autoridades en aras de detener las injusticias que históricamente se han impuesto a estas poblaciones por el simple hecho de ejercer su identidad y su cosmovisión.

Por todo lo anteriormente expuesto y al ser estas cuatro personas integrantes de diversas comunidades indígenas, el Estado tiene la obligación de aplicar los estándares jurídicos de protección correspondientes, por lo que se deberá tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales al momento de que las autoridades judiciales arriben a una decisión respecto a su situación jurídica, procurando adoptar la protección más amplia de las normas para la prevención del menoscabo en los derechos humanos de las personas involucradas.

Retomando dichas recomendaciones, se presenta el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías de las 32 Entidades Federativas a generar protocolos internos para garantizar el respeto a los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas que ingresen al territorio nacional con sus medicinas ancestrales, a efecto de procurar la máxima garantía y respeto de los derechos humanos de sus integrantes sobre sus costumbres y especificidades culturales con relación a sus prácticas médicas ancestrales, absteniéndose de efectuar detenciones arbitrarias y apegándose estrictamente a los principios de legalidad y seguridad jurídica contemplados en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna.

SEGUNDO.- El Senado de la República respetuosamente exhorta al Poder Judicial de la Federación a conducir sus procesos jurisdiccionales, actuaciones y resoluciones con la finalidad de velar por el respeto y garantía de los derechos reconocidos a las personas pertenecientes de comunidades indígenas, relativas a la portación y el traslado de sus plantas ancestrales, recursos y demás productos de medicina tradicional en absoluta libertad dentro del territorio mexicano.

TERCERO.- El Senado de la República exhorta al Poder Judicial de la Federación para que a través del Consejo de la Judicatura Federal garantice la aplicación de los estándares nacionales e internacionales en materia de pueblos indígenas en los procesos jurisdiccionales de las personas señaladas en el presente escrito, así como la aplicación del Protocolo de Actuación



para quienes Imparten Justicia en casos que involucren Derechos de Personas, Comunidades y Pueblos Indígenas.

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a los 21 días del mes de febrero del año 2023

Senadora

Olga Sánchez Cordero

Senadora

Xochitl Gálvez Ruiz

Senadora

**Alejandra Lagunes Soto
Ruiz**